

# CONTRAPUNTO ENTRE REFORMA Y REVOLUCIÓN: LA DEMOCRACIA EN COSTA RICA Y GUATEMALA<sup>1</sup>

## INTRODUCCIÓN

Éste es un ensayo que compara dos momentos de la historia política de Guatemala y Costa Rica: los años cuarenta y los finales del siglo XX. Son dos momentos en que la vida democrática de ambos países experimenta posibilidades y cambios. La comparación entre la sociedad costarricense y el resto de sociedades centroamericanas se ha intentado de tiempo en tiempo. Para todos, más para los analistas del exterior que para quienes nacimos en la región, es un desafío intrigante preguntarse por qué se producen tan radicales diferencias, especialmente entre Guatemala y Costa Rica.

Se argumenta que estos países forman una región<sup>2</sup> y que tuvieron un punto de partida común al formar una sola entidad

---

<sup>1</sup> Trabajo elaborado durante una estadía de investigación en el David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard durante el segundo trimestre del año 2000. Texto extraído de Jorge Rovira Mas, *La democracia de Costa Rica ante el siglo XXI*, San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica-Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica y Fundación Friedrich Ebert, 2001, pp. 21-40.

<sup>2</sup> Es tema de debate si como región física hay en el conjunto de Centroamérica

colonial, hablan español y adoran a Cristo. Compartieron varios decenios de república independiente; produjeron y exportaron a los mismos países café y banano. Formaron una zona de libre comercio a partir de los años sesenta del siglo XX y pese a otras dificultades, mantienen una creciente comunicación. Ninguna de tales razones es valedera para encontrar semejanzas políticas. De hecho, las diferencias existen antes del arribo de los españoles, se acentúan con la experiencia colonial y se convierten en estructurales a partir de la implantación de la agricultura de exportación. Cada día que pasa la distancia intrarregional es mayor.

Al proponer una comparación crítica entre Guatemala y Costa Rica en dos momentos parecidos de sus trayectorias, comprobamos una vieja hipótesis de la historiografía, que recuerda que las herencias del pasado pesan más como causa explicativa de la actualidad que mucho del movimiento de los actores en el presente. Los años cuarenta y comienzos de los cincuenta del siglo XX fueron decisivos en la historia política de Centroamérica, particularmente de Guatemala y Costa Rica. En ambos países ocurrieron fenómenos políticos que se relacionan directamente con sus posibilidades democráticas, su desarrollo social y político. Tales fenómenos fueron influenciados por los efectos que desde el exterior tuvo internamente el fin de la Segunda Guerra Mundial.

En los finales del siglo XX se han vuelto a plantear coyunturas críticas en relación con la vida democrática. Lo que ocurre en Guatemala está relacionado con momentos revolucionarios; en cambio, lo de Costa Rica se registra en la lógica de las reformas. Los progresos en Guatemala han ocurrido con base en cambios violentos, con fracturas; en Costa Rica, dicho con pleonismo, ha sido como una continuidad sostenida. La de Guatemala es una historia de cataclismos sociales; la de Costa Rica, un desarrollo

---

continuidad en la fauna, la flora, la estructura tectónica, etcétera. No es posible en este texto entrar en esa discusión. Asumimos a Centroamérica como una región histórica y cultural. Sus vínculos económicos, pese a la crisis del Mercado común, se han fortalecido.

con ligeros temblores, transaccionales. Es éste el dilema de revolución o reforma en el cambio político.

El estudio de la excepcionalidad de Costa Rica ha sido abordado de diversas maneras que no es el propósito revisar. El último de esos intentos es el trabajo de D. Yashar,<sup>3</sup> que propone en la versión de la teoría de las elites, la explicación de los diferentes desarrollos y desenlaces en estos países. Hace ya muchos años, interesado en explicar la lógica de este *continuum* de la historia centroamericana que sitúa a Guatemala y a Costa Rica en los extremos, hice comparaciones estructurales y saqué conclusiones que después otros analistas se han encargado de examinar con más cuidado.<sup>4</sup>

En aquel momento calificué la experiencia de Costa Rica como la de una democracia aristocrática, impresionado por los cruces y entreveros entre un núcleo cerrado de familias oligárquicas, de un origen común, cuyos cercanos lazos de sangre eran la garantía primaria para acceder al poder. Es ésa la razón que tal vez explica para Costa Rica la suave competencia pacífica entre iguales, muchas veces tramposa, que manteniendo los buenos modales políticos le dio estabilidad al sistema, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Y llamaba a la guatemalteca *una dictadura plebeya*, subrayando la historia de cataclismos políticos, quizá porque acceden al poder peleando en nombre de la oligarquía caudillos que no vienen de sus filas. El ejemplo funesto, la peor de las experiencias autoritarias de este siglo (22 años cruentos), fue la de un advenedizo, Manuel Estrada Cabrera, abogado pobretón, mestizo, hijo ilegítimo, provinciano, que reunía todos los componentes personales que jamás exhibiría el hombre oligárquico.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Véase Deborah J. Yashar, *Demanding Democracy: Reform and Reaction in Costa Rica and Guatemala, 1870s-1950s*, Stanford, Stanford University Press, 1997

<sup>4</sup> Edelberto Torres-Rivas, "Síntesis histórica del proceso político en Centroamérica", en Edelberto Torres-Rivas (ed.), *Centroamérica hoy*, México, Siglo XXI, 1975.

<sup>5</sup> Veinte años después intenté una comparación (véase Edelberto Torres-Rivas, "Personajes, ideologías y circunstancias: lo socialdemócrata en Centroamérica",

## LOS AÑOS CUARENTA: CALDERÓN GUARDIA Y ARÉVALO

En la década de los cuarenta surgieron en Centroamérica posibilidades de introducir reformas de fondo para propiciar cambios políticos y sociales, y avanzar en la construcción de regímenes democráticos. El impulso reformista estimulado por las condiciones favorables que produjo la Segunda Guerra Mundial se adelantó en Costa Rica, pero se reconoce como una ola democratizadora que provocó la victoria antifascista, y que produjo cambios políticos en Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia, Brasil, Honduras, El Salvador y Guatemala. En estos tres, las dictaduras militares, encabezadas por caudillos liberales, que del credo liberal ya no tenían memoria, fueron derribadas, como siempre ha ocurrido con este modelo de poder autoritario: desde afuera y como resultado de una violenta protesta popular.

La historiografía se ha encargado de explicar suficientemente para Guatemala la expulsión del general Jorge Ubico, heredero degenerado del ideario liberal reformista. La acumulación de tensiones y problemas que se congelaron virtualmente en sus 14 años de dictadura (1931-1944), el estancamiento económico, la asfixia de la vida social y cultural, los atroces métodos policíacos para asegurar el orden interior, condujeron a un estallido masivo de descontento en junio de 1944 y a un golpe cívico-militar en octubre de ese año. Y luego a la elección de Juan José Arévalo y al inicio de lo que en uso de un lenguaje más coloquial que ideológico, se llamó “revolución de octubre”, un verdadero punto de ruptura de la historia nacional.

El movimiento reformista se inicia en Costa Rica en 1940, con la elección del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, postulado por un Partido Conservador. Su elección fue, en consecuencia, un acto previsible en este sistema político, que no inquietó a

---

en M. Vellinga (comp.), *La socialdemocracia en América Latina*, México, Siglo XXI, 1993) entre las personalidades de Arbenz, revolucionario, y Figueres, reformista, que a comienzos de los años cincuenta fueron promotores de políticas de modernización que, como se dice en este trabajo, tuvieron resultados opuestos.

nadie. Tal vez fue importante ese resultado porque interrumpió —de hecho, puso fin— al ciclo de los caudillos liberales, ya en una tercera edad ideológica (Ricardo Jiménez Oreamuno y Cleto González Víquez). La victoria del Partido Republicano no fue sino la victoria de uno de los partidos del orden. Una situación completamente distinta se experimentó en 1945 en Guatemala. La elección de Arévalo, filósofo, sin militancia política, que enseñaba en el exterior, fue el resultado de un movimiento revolucionario que puso fin también al ciclo de caudillos liberales.

La elección de Arévalo fue un hecho anormal en la tradición política del país. Una amplia coalición de fuerzas sociales antidictatoriales, apoyada por partidos políticos que tres meses antes no existían, lo llevó a la victoria con el 85% de los votos. Fue esa una alianza de partidos de centroizquierda, creados en el momento de la elección, con más fervor y entusiasmo que experiencia en los manejos políticos. La victoria de Calderón Guardia fue la afirmación política de una importante fracción de la oligarquía terrateniente/comercial. La de Arévalo, en cambio, fue percibida como una amenaza por la poderosa fracción oligárquica de las fuerzas que apoyaron la dictadura militar.

El papel del individuo en la historia es muy importante, sobre todo si en los momentos en que se plantean crisis, cambios estructurales urgentes, o lo que se llaman “coyunturas calientes”, aparecen personalidades fuertes, dotadas de un instinto de oportunidad y de poder que les permite situarse por encima de programas, facciones o compromisos inmediatos. Calderón Guardia, médico formado en Bélgica, y Arévalo, filósofo formado en Argentina, llegaron al poder con inquietudes y proyectos personales resultado de sus particulares biografías. Personalidades fuertes, se movieron en un entorno al que impusieron sus convicciones y perspectivas.

La gestión de Calderón Guardia, impetuosa, se desarrolló a través de las tradicionales instancias institucionales, especialmente el Parlamento. Respondía a una preocupación personal, sin duda sensibilizado por los agudos problemas sociales heredados de la crisis de los treinta. Calderón inició su política social con la

instauración del sistema de seguridad social (1941) y una reforma constitucional que estableció las llamadas *garantías sociales*, un conjunto declarativo de avanzados principios a favor de los derechos de los trabajadores (1943).

En ese mismo año promulgó el Código de Trabajo. La legislación laboral costarricense estuvo inspirada por la doctrina social-cristiana contenida en las encíclicas papales (la *Rerum novarum*, de León XIII, y la *Quadragesimo anno*, de Pío XI).

Con una diferencia de cinco años, Arévalo hizo más o menos lo mismo, apoyado en una nueva Constitución (1945), que les dio el voto a los analfabetos, restableció la autonomía municipal y reconoció la propiedad privada como un derecho con función social. Promulgó el Código de Trabajo (1947) y meses después creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; dedicó por vez primera el mayor porcentaje presupuestal para la educación y promulgó la Ley de Arrendamiento Forzoso (1948), que obligó a los terratenientes a alquilar parcelas en tierra baldía a los campesinos. La de Arévalo fue calificada una “modernización legislativa”, que buscó establecer relaciones modernas entre el capital y el trabajo, reconocer los derechos básicos de los trabajadores y darle al ciudadano el mínimo de condiciones para el uso de sus derechos políticos. En un ambiente conservador, el *élan* reformista de esa modernización fue asumido como una revolución.

La coalición reformista en la que se apoyó Calderón Guardia fue más retadora que las medidas que propuso. Fue lo más aproximado a lo que en lenguaje figurado se llamaría un matrimonio *contra natura*: una sorprendente alianza entre la Iglesia católica, el Partido Comunista y, como eje impulsor, un Partido Conservador haciendo reformas avanzadas. Esa coincidencia no fue de naturaleza ideológica sino táctica y política: el apoyo personal, abierto y directo, del arzobispo de San José, monseñor Sanabria, y la participación activa del Partido Comunista, representado por Manuel Mora. Esta alianza —obreros, grupos medios, un desprendimiento oligárquico— redefinió la configuración política del grupo agrario cafetalero dominante al que dividió de manera irreconciliable.

La alianza reformista que encabezó Arévalo tuvo como eje movilizador a las clases medias que así hicieron su aparición política. Los elementos más activos de la coalición arevalista —profesionales, estudiantes universitarios, oficiales militares, maestros, artesanos, obreros— formaron tres partidos políticos de centroizquierda, animados por una confusa voluntad modernizadora, sin ideología precisa, salvo la de construir un régimen democrático. El referente directo era la negación de la dictadura militar que se acababa de derribar.

El surgimiento del Partido Comunista, a finales de 1948, fue clandestino e ilegal hasta 1951. Arévalo y los principales dirigentes políticos le tuvieron poca simpatía. En Guatemala, la alta jerarquía de la Iglesia católica fue claramente antidemocrática. El papel jugado por monseñor Rossell y Arellano, profundamente anticomunista, contrasta con el de monseñor Sanabria.

Las iniciativas políticas reformistas emprendidas por ambos gobiernos significaron importantes avances en la solución de la llamada *cuestión social*. Fueron de mayor eficacia en Costa Rica, porque se apoyaron en una estructura estatal ya existente y en una realidad nacional más consolidada. Ya esto marca una primera diferencia importante. Además, las nuevas políticas sociales en Costa Rica movilizaron un respaldo popular más coherente por la existencia de una cultura política más inclusiva, con actores sociales mejor organizados. En Guatemala, la introducción de las leyes sociales constituyó una revolución por arriba, de tono muy declarativo y con efectos limitados al medio urbano (la ciudad capital), que convocaba un apoyo popular poderoso pero difuso; pero sobre todo que despertaba viejos odios ancestrales en la burguesía agraria.

Los dos proyectos de cambio fueron formalmente similares y la comparación en ese nivel (salvados los cinco años de diferencia), sugiere una enorme coincidencia. Ambas políticas recibieron el apoyo y el rechazo de importantes sectores de la opinión pública, que reaccionaron frente a la voluntad reformista de introducir un giro fundamental en las reglas del juego social. A ningún grupo patronal le agrada que le alteren las normas tradicionales

de obediencia de sus grupos subalternos. No sólo es que la puja salarial pone en jaque los excedentes económicos. Es que se subvierte la inercia de las desigualdades que aseguran la supremacía moral y política de los propietarios. Sentarse a negociar con los subalternos ya es una derrota. En Costa Rica, el apoyo del Partido Comunista constituyó un elemento de exacerbación adicional al ya amenazado orden político. En Guatemala, la oposición de la Iglesia católica al programa reformista jugó como factor similar, que alimentó el furor anticomunista. Calderón Guardia y Arévalo perdieron el apoyo político de la elite dominante, aquél por su alianza con la izquierda, éste por su enfrentamiento con la Iglesia.

#### EN EL OJO DEL HURACÁN

En un escenario ya conflictivo, Calderón Guardia y Arévalo convocaron a elecciones presidenciales, en las que se ratificó el apoyo popular. A partir de aquí es esclarecedor cómo se define de manera desigual el desarrollo del conflicto, su naturaleza íntima. La andadura de la crisis y su desenlace se explican, en último análisis, por la fuerza o la ausencia de una tradición auténticamente liberal en Costa Rica y Guatemala, respectivamente. Ésa es la tradición de respeto a la ley y a las instituciones, a las libertades políticas, en cuyo centro está el individuo que tiene igualdad de oportunidades y derechos que el Estado protege y la sociedad promueve.

La oposición política, a la derecha de Calderón, creció en la calidad de su protesta utilizando la prensa y la Asamblea Legislativa. Canalizó su rechazo a la política calderonista a través de los partidos políticos. Y seguros del cambio en las elecciones presidenciales de 1944 con la victoria del caudillo conservador León Cortés, no esperaban la victoria de Teodoro Picado. El huracán de la crisis aumentó cuando éste ratificó la política social reformista de Calderón y mantuvo su alianza con los comunistas. El fervor anticomunista aumentó porque en las elecciones legislativas de 1946 el número de diputados comunistas pasó de 4 a 6, y dos años después fueron 12. El clímax de la crisis llegó cuando la oposición

anticomunista se presentó a las elecciones presidenciales de 1948 con un conocido periodista conservador, Otilio Ulate, que ganó el cargo pero perdió, a manos de la coalición progresista, el control de la Asamblea Legislativa. Hubo acusaciones mutuas de fraude; el Tribunal Electoral, integrado por ulatistas, se disolvió antes de conocerse los resultados, y la Asamblea anuló la elección. Aquí aparece, recogiendo el descontento, José Figueres Ferrer.

En Guatemala, Arbenz ganó las elecciones de 1950 con un 72% de los votos, en una campaña en que el tema central fue la oferta de modernizar las estructuras básicas de la sociedad, empezando con la tenencia agraria. La política reformista en este país no dividió a la elite dominante sino que la unificó. La victoria arbencista consolidó la oposición conservadora, que mantuvo la esperanza de que un militar no podía ser comunista. Pero desde 1951 no sólo tuvo el apoyo del Partido Comunista sino que bajo su inspiración Arbenz promulgó la Ley de Reforma Agraria en junio de 1952. La coalición progresista tenía prisa por modernizar el país, y bajo la influencia de una visión marxista llevó a sus límites la voluntad reformista: liberar al campesinado atado por el sistema de deudas, terminar con las relaciones semiserviles y entregar la tierra no cultivada a quienes la solicitaran. Querían establecer así las bases sociales de la democracia y del desarrollo nacional. La grave crisis política alcanzó su momento decisivo cuando el mayor terrateniente del país, la United Fruit Co., fue afectado.<sup>6</sup>

En Costa Rica la elite oligárquica se dividió en diversos momentos, viviendo la sociedad un clima crecientemente violento (huelga de brazos caídos contra Picado, rechazo a la reforma electoral, protestas callejeras que se transformaron en brigadas de choque, etc.). Los años del gobierno Picado fueron de una extendida agitación social. El país entró en un desconocido camino de violencia partidaria, polarización ideológica, huelgas y un en-

---

<sup>6</sup> En la descripción de la crisis de ambos países se han omitido otros aspectos importantes. Se hace énfasis en los rasgos que la definieron, en una simplificación que sólo se justifica por la naturaleza de este ensayo.

frentamiento que descompuso la tradicional conducta pacífica de las relaciones políticas. Todo el año 1947 fue de una inestabilidad general y la elección de 1948, por su resultado contradictorio, el factor final que desencadenó una salida no democrática.

Ésta pareció justificada por razones electorales por parte de la oposición parlamentaria, que calificó la elección como fraudulenta. Figueres y su grupo empujaron la guerra civil pidiendo elecciones honestas, pero movido más por el temor al comunismo.

Ni con Arévalo ni con Arbenz los sectores conservadores hicieron una oposición democrática. La oligarquía no creó nunca un partido político. En la época de Ubico sólo estuvo autorizado el Partido Liberal, que no era en realidad un partido sino una breve maquinaria electoral para que funcionara una irrealidad parlamentaria. La oposición oligárquica no pudo, en consecuencia, hacer oposición a través de algún partido, o en el Parlamento, ni utilizar las instituciones del Estado. La raíz oligárquica y terrateniente explica que el malestar por las políticas reformistas, desde el inicio, se convirtiera en la lógica política del pasado, en un juego suma-cero. La derecha guatemalteca, incapaz de entender cómo podía autorizarse la libre organización sindical, o calificando de innecesaria la campaña de alfabetización porque era una puerta abierta a la indoctrinación comunista, se colocó en el plano inclinado al que la llevaba el peso de su condición social: la defensa de sus intereses particulares como la defensa del sistema.

En Costa Rica, el ambiente a partir de 1946-1948 era muy parecido al de 1951-1953 en Guatemala. El rompimiento del orden político ocurrió en los dos países, pero con resultados claramente distintos. En esta explicación resulta decisivo entender la diversa textura democrática de ambas sociedades.

## LA IMPORTANCIA DE LA TEXTURA DEMOCRÁTICA

¿Eran ambas sociedades igualmente democráticas? ¡Sin duda, no! La red de relaciones sociales, económicas, culturales e ideológicas heredadas que conforman la densidad democrática de un país, no sólo se reflejan en la práctica electoral. Es probable que

la elección de Arbenz haya sido más libre que la de Ulate. Pero recordemos que unas elecciones no bastan para hacer democrático a un régimen político. Tal vez sirvan para empezar a darle una textura democrática a la sociedad y al gobierno que las convoca. Para que sea democrático el régimen político es necesario que lo sea el ambiente en que ellas se preparan y se desarrollan, y que esa calidad se mantenga, cualesquiera sean los resultados. Las elecciones ayudan a consolidar la vida democrática sólo si antes y después de realizadas se respetan los derechos políticos, y si esa legalidad se mantiene durante un buen tiempo.

La derecha guatemalteca, jugando por vez primera a la concurrencia partidaria, no aceptó el veredicto de las urnas porque nunca había experimentado la competencia política. En la tradición autoritaria, por definición, el contrincante no es un opositor sino un enemigo. Manejaban una concepción de la participación en que no cabía la disputa, el antagonismo. Por ello no les importó que la victoria de las fuerzas democráticas hubiese sido limpia y justa en 1950. El resultado reforzó su ánimo conspirativo: el golpe militar. A la derecha costarricense no le gustó la política reformista del calderonismo ni la victoria de Picado, pero canalizó su descontento a través de las instituciones democráticas: el ejercicio de la libertad de prensa, del partido político, de la oposición parlamentaria. Manejaron la crisis en el interior de lo político.

Yashar recuerda con acierto que la oligarquía guatemalteca entró en el periodo reformista con una clara limitada tradición histórica de participación política y con un estrecho repertorio de instituciones políticas representativas.<sup>7</sup> Por carecer de partidos, la derecha recurrió en su protesta, por ejemplo, a la Asociación General de Agricultores (AGA), que agrupaba al núcleo más duro de los terratenientes. Pero una asociación gremial no puede intermediar políticamente entre la sociedad y el Estado. Al hacerlo, contaminó doblemente el ambiente: representó intereses corporativos privados, de clase, como si fuesen intereses nacionales;

---

<sup>7</sup> Véase Deborah J. Yashar, *Demanding Democracy: Reform and Reaction in Costa Rica and Guatemala, 1870s-1950s*, *op. cit.*

y planteó el conflicto fuera de la esfera política, como amenaza, ruptura, eco directo del juego suma-cero del que ya hablamos. Por lo demás, un gremio patronal no tiene hábitos de diálogo en la tradición oligárquica.<sup>8</sup> Desde 1948 abandonaron a la AGA y buscaron el apoyo de las dos instituciones nacionales existentes: la Iglesia católica y las Fuerzas Armadas. Los unificó el pánico y el anticomunismo, que fue su salvación ideológica. Los ayudó la guerra fría y directamente la política norteamericana.

Las diferencias entre actores políticos en una sociedad democrática se resuelven en el interior del campo político, donde las fuerzas se miden electoralmente, utilizando al Estado y a la política dentro de los límites que ellos establecen. Es decir, se enfrentan en el interior de las instituciones del Estado como campo de fuerzas políticas. Es peligroso trasladar la crisis a la sociedad, porque ahí ya no es la ley sino la fuerza la que decide. Resolver las diferencias dentro del Estado significa privilegiar la política, el juego de competencias, las leyes, la opinión pública. La política democrática está basada en el acceso institucionalizado al poder, como lo hizo la elite conservadora costarricense, jugando en las elecciones de 1944, 1946 y 1948. La crisis se profundizó y su salida fue la guerra civil, planteada por la insurgencia de Figueres y su grupo. Ésta no fue una salida democrática y cabe la duda, en la tradición de este país, acerca de la necesidad del conflicto armado. José Figueres, perseguido por el gobierno de Calderón, se había convertido, con su grupo, en una poderosa tercera fuerza anticomunista. Organizó la revuelta armada con ayuda del presidente Arévalo, y se alzó al saberse los resultados electorales. Este episodio se conoce en la historia nacional como “la guerra civil del 48”. Figueres derrotó propiamente a las brigadas comunistas, ya que el ejército nacional era muy pequeño. El grueso de

---

<sup>8</sup> Por ejemplo, júzguense las razones por las cuales se opusieron a la legislación laboral: “[...] los líderes [sindicalistas] quieren el Código de Trabajo para provocar el desequilibrio económico total [del país] a fin de pedir y justificar la nacionalización de la tierra y la expropiación de los medios de producción [...] Estamos en capacidad de afirmar nuestra certeza en identificar la existencia de un complot para paralizar la producción agrícola del país [...]”.

la oligarquía, opuesto a Calderón y a Picado, vio con simpatía la acción militar de Figueres.

Su victoria tuvo efectos extraordinarios y contradictorios, que sólo se comprenden por la textura democrática de este país. Al derrotar al calderonismo venció a la oligarquía en su conjunto, no por el triunfo militar sino porque hizo suyo y desarrolló el programa reformista de aquél. Al derrotar al Partido Comunista tuvo opción para crear las bases para una sólida política social. En otras palabras, Figueres apoyó a la oligarquía para derrotar al frente progresista y luego, con la victoria, hizo suyo el programa social de la izquierda para enfrentar a la oligarquía. Todo eso en nombre del anticomunismo y con apoyo norteamericano. Retuvo el control del poder durante 18 meses (la Junta Fundadora de la Segunda República), apoyado en el éxito militar, período que aprovechó para impulsar una nueva y moderna constitución, abolir el Ejército, nacionalizar la banca privada e imponer un impuesto único a los cafetaleros. Apoyado en los sectores medios creó su propio partido, el Partido Liberación Nacional (PLN). Al entregar el poder en 1949 a Otilio Ulate, el ganador de los comicios que originaron el conflicto neutralizó el descontento de la oligarquía. Al ser electo presidente constitucional, en 1953, se alzó con la más amplia mayoría nunca alcanzada (65%), y una nueva época empezó para el país. El papel de Figueres en la historia no ha sido aún bien analizado.<sup>9</sup>

Estos dos ejercicios democráticos terminaron de manera distinta. En Costa Rica la crisis del orden oligárquico encontró una salida democrática; en Guatemala, la solución fue perfileadamente autoritaria.

---

<sup>9</sup> Ricker llama a estos personajes *heresthetics* porque tienen la facultad de jugar con el poder, de manipular situaciones contradictorias, de ganar en situaciones de ambigüedad que para otros serían condiciones insalvables. Arbenz dio indicios de esta facultad, que el final de su historia se encargó de negar. Véase William Ricker, *The Art of Political Manipulation*, New Haven-London, Yale University Press, 1986.

Las fuerzas protodemocráticas<sup>10</sup> encabezadas por el figuerismo se apoyaron en la división de la coalición conservadora, lo que facilitó la estrategia antioligárquica y modernizadora. Esto pudo ocurrir por la densidad democrática del país, incluyendo aquí la movilización del apoyo campesino por el importante desempeño de las clases medias y sus partidos políticos, y el fortalecimiento del papel del Estado. Se terminaban de poner, así, las bases de la democracia moderna en Costa Rica. En Guatemala, el frente oligárquico se reconstituyó agresivamente casi de inmediato, con las primeras medidas reformistas en el comienzo del gobierno de Arévalo. La coalición democrática fue perdiendo cohesión orgánica e ideológica, al escindirse gravemente el apoyo de las clases medias. El anticomunismo ganó la primera batalla, la de la conciencia pública, al movilizar el fondo colectivo del atraso; la Iglesia católica y el apoyo norteamericano pusieron el resto: sensibilidad y dólares.

Arbenz y el frente de partidos revolucionarios, cada vez más radicalizados, tampoco buscaron la negociación. El país no tenía densidad democrática y el tono subversivo de la conspiración militar se marcó desde el inicio. El gobierno de Arévalo resistió 28 intentos de golpes de Estado, uno de los cuales, el del 18 de julio de 1948, fue una abierta lucha militar de 48 horas. Planteada la crisis en términos militares, la izquierda demostró incapacidad para reaccionar. Se buscó armar a los sectores populares, pero el Ejército, que ya estaba en la conspiración, lo impidió. El proyecto reformista de Arbenz se hundió cuando el alto mando militar le restó el apoyo, con el país invadido por una fuerza mercenaria. Se vio obligado a renunciar, actuando así más como militar que como político. La oportunidad democrática en Guatemala se mantuvo por una década. Su fracaso abrió el peor período de dictaduras

---

<sup>10</sup> Esta síntesis deja de lado importantes aspectos de la reconstrucción democrática, tales como el papel jugado por los miembros del Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, por el Partido Liberación Nacional, etcétera. Explicarlo todo en torno a Figueres es un recurso de presentación de este trabajo que no debe sobrepasar cierto número de páginas.

militares, que después de 1966 fueron contrainsurgentes. Más de 200.000 muertos es el trágico saldo de lo que vino después.

## UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA GUATEMALA

A partir de 1982 se deterioró el poder contrainsurgente, y la alianza militar/empresarial que lo respaldaba se descompuso. Su síntoma mayor fue el golpe militar contra el gobierno del general Lucas. Este hecho marca el inicio del final de los gobiernos autoritarios. Hacia esas fechas las fuerzas guerrilleras habían sido militarmente derrotadas. En 1985 se decreta una nueva constitución que crea varias instituciones democráticas; la organización partidaria crece y, pese a violaciones a los derechos humanos, la participación política se reconstituye. Hasta 1999 se han realizado cuatro elecciones generales, abiertas, competitivas y sin fraude. Con notorias dificultades, está en camino de consolidarse una democracia electoral.

¿Cómo se explica esta nueva oportunidad democrática? Hay diversas versiones. Se habla de un “camino popular hacia la democracia” argumentándose que sin la lucha guerrillera las fuerzas conservadoras habrían continuado la tradición autoritaria de gobierno. Además, los costos del conflicto habrían afectado de diversas maneras los intereses oligárquicos, situación en la que los dividendos de la paz resultaban mejores. Pero hay que recordar que la erosión de la estructura autoritaria ocurrió como una crisis en el interior del Ejército sin que en ella tuviera que ver la protesta popular. La convocatoria electoral de 1984 fue una decisión de la cúpula militar, por lo que la primera etapa de la transición se caracterizó por la asincronía de guerra y procesos democráticos, dándoles a éstos una radical ambigüedad. Otra versión interpreta la decisión militar de dejar el poder como parte de una estrategia contrainsurgente: legalizar el poder en manos civiles, para dedicarse a ganar la guerra, y de paso, dejar la desgastante administración de la crisis económica. Una tercera explicación atribuye la decisión de entregar el gobierno a los partidos políticos, a las poderosas influencias del exterior. Sería el efecto de demostración

de una “tercera ola” democratizadora mundial, en cuyo interior resultaría decisiva la presión de EE.UU. Su política exterior estaría ahora orientada a fomentar los procesos electorales, al punto de que hacen de una elección la única condición democrática.

Es mejor concluir que en la creación de la oportunidad democrática hay factores concurrentes, donde sin duda el escenario internacional es importante. Es evidente que no hay aquí un “camino revolucionario”, un proceso impuesto desde abajo. La guerrilla se opuso firmemente a las primeras convocatorias electorales, pues sabía que eran tácticas para aislarla más. El desgaste del poder militar y su descrédito internacional fue un factor al que se sumó el cansancio en la población después de casi cuatro décadas de violencia criminal. El inicio de gobiernos civiles no significó un regreso militar a los cuarteles. Confiaron en que el proceso democrático, al igual que el conflicto armado, estarían bajo su control. Y así pudo ser con el primer gobierno, el del democristiano Vinicio Cerezo. No previeron los efectos democratizadores de las elecciones y del juego partidario, que se “escapó” de la vigilancia militar, ni las negociaciones de paz, que sólo fueron posibles porque había gobiernos civiles. El fortalecimiento del proceso democrático favoreció el fin del conflicto armado y éste, a su vez, fortaleció la transición democrática. La paz y la democracia se dan la mano para avanzar.

¿Hay cambios realmente? Por vez primera en cuatro décadas una generación de guatemaltecos vive en democracia y sin violencia armada, y las violaciones de los derechos humanos prácticamente han terminado. Pero hay serios obstáculos para la consolidación del proceso. El acuerdo de paz se firmó con un retraso de 14 años, que dio oportunidad para que en ese trecho se firmaran acuerdos sustantivos, compromisos que de honrarse, cambiarían la naturaleza de la actual sociedad guatemalteca. Pero el proceso de cumplimiento se viene debilitando aceleradamente. El gobierno de Arzú, que lo llevó a feliz término, se desentendió de cumplir algunos de los puntos torales: la supresión del Estado Mayor Presidencial, la reforma tributaria, el apoyo a las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. El proceso sufrió

un serio traspies con la victoria del *no* en el referéndum (16 de mayo de 1999), que hubiera permitido elevar a rango constitucional los principales acuerdos. Y el actual gobierno de Portillo ya desperdició la oportunidad de hacer esa tarea en los primeros 100 días, cuando aún contaba con el millón y medio de votos que le dieron la victoria. La necesidad de construir la paz implica también rehacer el modelo económico de desarrollo bajo las nuevas condiciones de la globalización y, sobre todo, enfrentar las acentuadas condiciones de desigualdad y pobreza, ahora peores que antes del conflicto.

Resulta importante, de nuevo, la comparación con Costa Rica. Las fuerzas sociales que se interesan en el proyecto democrático en Guatemala son débiles, nuevas y sin ninguna cohesión orgánica. La transición desde la dictadura obedeció a una crisis de la cúpula militar y no a una demanda popular, de masas. En el campo democrático no hay partidos políticos sino una abigarrada presencia de organizaciones sociales, más vinculadas a la defensa de los derechos humanos y a los problemas de los grupos étnicos y de género. El conflicto destruyó el centro político y la izquierda es débil porque fue masacrada durante 36 años. La ex guerrilla, organizada en partido político, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), se alzó con un 12% en las últimas elecciones de 1999; se mantiene escéptica y sin experiencia para el juego político/electoral. El tono político lo dan las pugnas entre partidos conservadores y entre éstos y las cámaras empresariales unificadas en la todopoderosa Cámara de Empresarios de la Agricultura, el Comercio, la Industria y las Finanzas (CACIF). La Iglesia católica se viene replegando paulatinamente, sin abandonar su denuncia por el respeto a los derechos humanos. El movimiento sindical sólo se mantiene por la evidencia de sus membretes, y el movimiento indígena, que tantas expectativas creó como una nueva fuerza social, está por ahora dividido, confundido y con una evidente pérdida de oportunidades. En suma, una sociedad civil débil, fragmentada y en proceso de constitución.

Hay preguntas difíciles. Si tal es la composición de fuerzas en un escenario en donde se construye la democracia, ¿qué sectores

se comprometen en su fortalecimiento? ¿Por qué la elite burguesa, aliada histórica de los actores militares y ella misma de vocación autoritaria, acepta ahora las reglas del juego democrático? ¿Están los militares, que ganaron el conflicto, aceptando en este final de siglo, la majestad del poder civil?

Las respuestas no son difíciles sino sorprendentes. En Guatemala se transita a la democracia política bajo la dirección de actores conservadores que no creen plenamente en ella. Es un detalle importante recordar que por vez primera la burguesía agraria participa en elecciones competitivas, apoyándose por fin en partidos políticos y no sólo en sus gremios. Han entrado, por fuerza de las circunstancias que ellas no crearon, en escenarios donde se juega el poder sin ayuda militar. Ahora, son ciudadanos que aceptan el “enredo” de la democracia participativa porque hasta ahora están seguros de que no pueden perder.

Algunos autores que han estudiado el cambio político que trajo la guerra<sup>11</sup> consideran que en todo este período de crisis, con los efectos del conflicto y los provocados por la extraversion de la economía, cambió el perfil clasista de la oligarquía. Hoy en día son otros los (o sus) intereses que priman en el mercado. Los intereses dominantes ya no están (exclusivamente) en la tierra ni en la producción agrícola, sino en los servicios, en el comercio en gran escala, en la especulación financiera, en su articulación con inversionistas del exterior. Con los efectos de largo plazo de la guerra y los inmediatos de la globalización, el café deja de ser importante. Las remisiones de dinero de los guatemaltecos pobres, que están en el exterior, constituyen la mayor fuente de divisas. Esta sustitución de intereses habría determinado en el interior de la burguesía el razonamiento de que los costos de un conflicto tan prolongado terminaron por ser insoportables. Animados por la derrota de la guerrilla decidieron pagar el precio

---

<sup>11</sup> Véanse Jeffrey Paige, *Coffee and Power*, Cambridge, Harvard University Press, 1997, y Ana Sofía Cardenal, *Elites agrarias y democracia: una explicación del proceso de transición salvadoreño*, Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 1995 (tesis doctoral).

de la democracia. El ejemplo salvadoreño y de otros países que se han democratizado cuenta mucho.

Pero han entrado en este juego de incertidumbres sabiendo que en las actuales circunstancias siempre podrían ganar. Y así ha sido. Ha cambiado, por lo tanto, la conducta de la llamada “derecha desleal”, esa que financió los escuadrones de la muerte y cuyos conflictos laborales los resolvían mandando a asesinar a la directiva sindical. Cambió también la izquierda guerrillera, que al firmar la paz aceptó incorporarse como el ala política de izquierda del orden liberal. Y por ello ahora buscan con premura situarse en un aceptable centro-izquierda. En estas condiciones, en los aspectos políticos de la democracia se avanza, pero hay una desatención de las bases sociales y económicas, donde la inequidad es total.

Los militares aceptaron la paz como un efecto no previsto y que trajo el poder civil que contribuyeron a crear. El acuerdo sobre el papel del Ejército en una sociedad democrática no ha sido debidamente cumplido. Mantienen su estructura básica, con un 30% menos de tropa pero un número igual de oficialidad, más presupuesto y con control político, de hecho, en las zonas rurales. Sin embargo, en la consolidación de la democracia no constituyen una amenaza substantiva. Lo más grave es la ausencia de partidos democráticos o de fuerzas sociales organizadas, con coherencia, que puedan constituir el sostén de la modernidad política que el país necesita.

#### COSTA RICA: ¿AMENAZAS A SU DEMOCRACIA?

En Costa Rica el problema no es la consolidación de la democracia, como en Guatemala, sino su profundización. Este país empezó a tener rasgos excepcionales desde su fundación, sin que sean ciertas algunas de las explicaciones que durante un tiempo se vinieron repitiendo. Una imagen idílica, falsa, para explicar la originalidad costarricense. Aquí hubo latifundio y hubo explotación campesina, hubo conflictos y reiterado fraude electoral. Pero durante años se fueron sembrando las semillas de la democracia

moderna, que germinaron hacia los años cincuenta del siglo XX. Para construirla fueron necesarios muchos años de estabilidad, la continuidad, la permanencia de instituciones liberales, como los partidos y las elecciones, la educación, la tolerancia, el manejo de los conflictos. Sin duda es importante la sedimentación de una tradición que luego se transforma y alimenta un mito: el del igualitarismo, el de la sociedad homogénea, sin conflictos, del campesino tenaz, del país democrático. La virtud del mito es su fuerza integradora, hacia delante, que se transmite a las nuevas generaciones y a las instituciones.

Una primera razón, en la coyuntura actual, es que la fuerza de los mitos se debilita y tal vez su crisis alimenta el sentido común, esa amplia opinión pública que hoy en día repite que la democracia en Costa Rica está gravemente amenazada. Hemos encontrado varios analistas, nacionales y extranjeros que, llenos de temor, ven pruebas negativas allí donde sólo hay indicios. Nuestro principal predicamento es que los problemas que enfrenta la democracia en Costa Rica son los propios de toda democracia avanzada, y en consecuencia su desafío es profundizarla. Sin duda, el sistema político de este país también enfrenta desafíos y dificultades. Pero como lo aconseja el texto bíblico, hay que desconfiar de las bocas que predicen tempestades. De hecho, ninguna democracia es irreversible, y como lo ha probado la historia de América Latina, viejas y nuevas democracias se descomponen con una atroz originalidad.

Una segunda y tal vez importante causa de las dificultades que padece en estos tiempos el sistema político es su retraso frente a los cambios que la sociedad costarricense ha venido experimentando, cambios acelerados en los últimos años. No se está pensando en el cambio predecible, que ocurre en toda sociedad, sino en los que introducen factores nuevos, propios de la coyuntura mundial y que por eso mismo alteran la normalidad de las transformaciones previsibles. Nos referimos a un cambio tan trascendental como imperceptible en virtud del cual la economía de mercado va transformando estas sociedades en sociedades de mercado. Al mercantilizarse (en un sentido moderno) no sólo cambian los

vínculos económicos sino muchas otras relaciones sociales, ahora regidas por las leyes y los valores del mercado. Las visiones tradicionales, arcaicas, del país y de la sociedad que el mito nacionalista alimentaba, dejan de corresponder con la realidad.

Esto tiene un efecto multidireccional, pero especialmente con relación a las bases sociales de la democracia, y su fuerza hace que la estructura política se adapte con retrasos. La teoría del mercado libre proclama que no es necesaria la política, porque la soberanía del consumidor prevalece, y el mercado asegura la libre elección. Y esto reduce el papel de la política, la vuelve innecesaria. Y si, como se dice entonces, la política se despolitiza (y se privatiza), se erosiona la vida democrática.<sup>12</sup> Los partidos debilitan su oferta electoral, tienden a parecerse y el aburrimiento llega, pero acompañado de narcisismo. De la misma manera que ocurre con las ideas políticas, la vida política hoy en día parece estancarse en un “centro amplio y difuso” en el que todos los partidos compiten por ocuparlo. La fuente del hastío ciudadano se origina en esta concurrencia, en la promesa de combinar lo uno y lo otro: libre mercado y Estado de bienestar, individualismo y justicia social, desregulación y gobernabilidad. Estar a favor de todo es mejor estrategia que definir bien una posición o establecer prioridades. Los partidos políticos juegan a todo para ser menos vulnerables a la deslealtad electoral. Es esto lo que está ocurriendo en Costa Rica, de manera similar a lo que experimentan aquellas sociedades donde la democracia funciona bien desde hace mucho tiempo. Se dice que “los partidos tienden a no diferenciarse” porque, en efecto, las opciones de política socioeconómica son pocas. No se definen ideológicamente, como en el pasado, y prefieren situarse en un “nuevo centro” que no es sino la llamada y mal comprendida “tercera vía”. Es ésta una manera ingeniosa —y por momentos útil— de darle dignidad ideológica a la operación de capturar el voto menos ideológico y volátil, en la que apenas se distinguen los grandes partidos políticos. Como lo dijo un político francés,

---

<sup>12</sup> Eric Hobsbawm, *On the Edge of the New Century*, Nueva York, The New York Press, 2000, p. 57.

conquistar la mayoría consiste en dejarse perdonar por un mayor número de personas.

Algunas instituciones democráticas deben remozarse, particularmente la Asamblea Legislativa. Hoy en día el tiempo del debate parlamentario tradicional tiende a ser menor con relación al tiempo de trabajo de las comisiones, donde la dimensión técnica es la más importante. Para que los diputados tengan presencia política, deben poder negociar los aspectos trascendentes de la política. Pero si, como ya ha ocurrido dos veces, las cúpulas, la elite, o casi “los caudillos” negocian de forma palaciega, en silencio, dejan en el aire las raíces de la democracia parlamentaria.

Ésta es una sociedad de extendida clase media que ahora, además, se define por el consumo. El narcisismo individualista tiene hoy en día a sus clases medias viéndose en el espejo pero sumidas en el hastío político, viviendo la superficialidad emocional del consumismo, cuya significación alegórica es la alegría de ver vitrinas en un *mall*, donde está comprobado que el 70% de los paseantes no compran. Multiplaza, el *mall* San Pedro, el Real Cariari y otros que surgen por todas las direcciones de la ciudad, atraen masas. Un público que tiene serias reservas para asistir a un buen mitin político.

Todo esto tiene efectos perniciosos entre las nuevas generaciones que no vivieron el momento figuerista, y menos aún la experiencia popular del calderonismo. La sociedad de mercado y la dimensión negativa de la globalización empujan intelectualmente a la identificación de la libertad con la elección individual, el fenómeno aberrante de tomar decisiones que no tienen en cuenta las consecuencias sociales de lo que se hace. Ahora se vuelve más difícil —por incompatible— la lucha por la libertad individual y la solidaridad colectiva. Esto debilita moralmente la democracia, pues la política democrática se produce en la medida en que es posible organizar al pueblo y actuar colectivamente en su provecho. Si todo esto se debilita, se pone en peligro la vida democrática. Éste es el tipo de problemas que afectan a la política costarricense.

La fuerza de la tradición y de los mitos que alimentaron las viejas estructuras participativas, ha perdido eficacia. Su capacidad reconstructiva revierte sus efectos, uno de los cuales es alimentar identidades. Y ni la política ni la vida cotidiana hoy pueden basarse en la percepción idílica que favoreció, por ejemplo, el extraordinario rechazo que esta sociedad tiene por los conflictos.

Ésta, hace mucho tiempo, que dejó de ser la patria de “labriegos sencillos”. Es importante advertir que la sociedad tica ya no es una comunidad, que las diferencias sociales se han acentuado y su visibilidad es aún mayor. El mito, tan fuerte en la sociedad costarricense, cuando no funciona más y antes de ser substituido, produce vacíos de inestabilidad cultural, emocional, política. La democracia deja de tener esas bases sociales y debe encontrar otras, profundizando sus urgencias de representatividad.

Otro efecto de los nuevos tiempos y no imputable a las elites políticas es que muchas opciones públicas dejan de tomarse en función de factores internos, como ocurrió hasta ahora. Es decir, cuando eran factores controlables políticamente. Ahora se obedece a influencias dinámicas que ocurren localmente, sin duda, pero que corresponden a determinaciones de la nueva interdependencia mundial (globalización). El sentido común del ciudadano lo lleva a acusar al ministro, al diputado o al presidente. Ellos no tienen alternativas. Un aspecto sensible es el desfondamiento del pacto socialdemócrata, que tanta nostalgia provoca. Pero las determinaciones del mercado empujan a políticas que producen mayores desigualdades sociales. Resulta paradójico, pero la concentración del ingreso y las desigualdades están asociadas a la modernización de la economía y a su competitividad, que debería alcanzar un límite que esperamos sea inmediato. Lo anterior podría ser motivo de condena moral, pero ella no ayuda al análisis del fenómeno. Aquí se hace añicos otra creencia popular, pues esta sociedad rechazaba las desigualdades y no está preparada para aceptarlas. Ahora serán mayores y más visibles y pueden tener efectos en aumentar el descontento social.

Hay que mencionar otro factor asociado a esta nueva época. Recordemos que ésta es una sociedad en que el Estado lo ha re-

suelto todo, o casi todo. Es una democracia estatal. Desde 1950, es en el interior del Estado y de los espacios públicos que establece su sólida presencia, donde se producen y se resuelven los conflictos que dinamizan lo social. Y es desde el Estado donde se promueven los cambios sociales, económicos, políticos, que fundan la moderna democracia política y el desarrollo económico. Bastan dos ejemplos: a la oligarquía no hubo que aplicarle los métodos jacobinos de la expropiación para cambiarla. Desde el Estado se construyó el sistema cooperativo que debilitó el poder económico de los torrefactores<sup>13</sup> (capital cafetalero/comercial). Con ayuda del Estado se cambió la variedad tradicional del café, que convirtió a Costa Rica en la zona de mayor productividad por hectárea sembrada del mundo, beneficiando así, sobre todo, al gran capital productor. Y fue el Estado el que al nacionalizar la banca, democratizó el crédito rural, creó un sistema de seguridad social universal e hizo de la educación pública un sistema de indiscutible calidad frente a la privada. Como es un buen administrador, los servicios de electricidad y comunicaciones siguen siendo servicios públicos. La crisis y la protesta contra el llamado “combo energético” prueban la fuerza del apoyo popular, que además se desentiende de los partidos políticos. Esta movilización desde la sociedad civil no prueba la debilidad sino la salud de la democracia.

El Estado, hoy en día, tiene que dejar de hacer muchas de las cosas que ha venido haciendo y que quisiéramos que no abandonara. Entre otras, privatizar valiosos activos públicos. El terreno de la política monetaria, fiscal, cambiaría le está siendo reducido como una necesidad de ajustes permanentes conforme los cambios que ocurren en el mercado internacional. Ya mencionamos la política salarial, que obedece a las determinaciones de la productividad conforme estándares internacionales. El sistema de seguridad social está condenado a modificarse radicalmente. Las clases medias, base de la democracia, conviven mejor con el Esta-

---

<sup>13</sup> El término alude, en Centroamérica, a aquellos que procesan y tuestan el café. (N. del E.).

do que con el mercado. ¿Podrá el ciudadano promedio soportar un Estado que ya no hace favores? Son las relaciones entre el Estado y la sociedad resultado de las desregulaciones que se están alterando. El Estado, pequeño pero no débil, tiene que cuidar activamente de que todos los ciudadanos puedan comerciar libremente en los mercados.

La polarización social ha existido siempre, pero se oculta un tanto mejor en una sociedad democrática. La democracia también tiene el mérito de que disimula las polarizaciones ideológicas, pues en el nivel de las apariencias tiende a volver semejantes y hasta compartidos los valores políticos de quienes mandan y de quienes obedecen. El votante ahora se pregunta quién es capaz de hacer lo mismo, pero mejor. El régimen bipartidista es vigoroso pero las transacciones por arriba lo vuelven innecesario. Sin duda, una tercera fuerza, de mayor consistencia democrática, podría renovar la competencia electoral y darles nuevas oportunidades de participación a los nuevos ciudadanos. Es éste un desafío histórico que puede profundizar la democracia. Pero si esto no ocurre es porque la nueva generación se ha desentendido de los valores de la vida pública. Hay una causación circular, el gato que gira para morderse la cola.

Tal vez habría que prever que en el futuro inmediato el fundamento de la democracia consensual costarricense podría alterarse. Tendría que darle paso a lo que Laclau y Mouffe llaman el más importante de los rasgos democráticos: el conflicto. Profundizar la democracia es hacer descansar la fuerza de la democracia no sólo en la unanimidad o el consenso sino en el pluralismo del conflicto, y en la capacidad del poder para resolverlo con sus propios mecanismos legales. Si esta capacidad se debilita y las leyes no son respetadas, la dictadura está a la vuelta de la esquina. La democracia moderna tica es la única que no se apoyó en el momento de su constitución en un movimiento sindical fuerte en el sector privado. Sólo acepta huelgas de trabajadores de cuello azul. Más bien, se construyó reprimiéndolo. ¿Está preparada la sociedad para el conflicto social?

La conclusión de todo lo anterior es optimista. Las fuerzas que dinamizan la vida democrática en Costa Rica están siendo puestas a prueba con todo lo que ocurre desde 1998. Es, entonces, una crisis que apunta a su fortalecimiento y que necesita de una renovación del Estado tanto como de la sociedad civil. Lo de Guatemala se maneja en un plano histórico distinto. Asistimos a la constitución de una democracia política, que tendrá que ser una democracia racial. El ambiente de paz es favorable y sin duda la voluntad mayoritaria también lo es, pero requiere de un Estado moderno y eficaz y de una sociedad civil que dé paso a la organización sostenida de los intereses particulares que durante mucho tiempo fueron castigados al intentar hacerlo, y particularmente de su sistema político, de la estructura de los partidos políticos. Experimentando momentos distintos, Guatemala y Costa Rica enfrentan el reto de renovarse para ir hacia adelante.